

**RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE PROCEDE A DECLARAR CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO INICIADO POR LA SOLICITUD DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. DE AUTORIZACIÓN PARA TRASLADAR A BT LOS COSTES DE PROVISIÓN DE UN CIRCUITO DE 2 Mbit/s.**

**IRM/D TSA/2001/15**

## **SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA**

### **Presidenta**

D<sup>a</sup>. María Fernández Pérez

### **Consejeros**

D. Eduardo García Matilla

D<sup>a</sup>. Clotilde de la Higuera González

D. Diego Rodríguez Rodríguez

D<sup>a</sup>. Idoia Zenarrutzabeitia Beldarraín

### **Secretario de la Sala**

D. Miguel Sánchez Blanco, Vicesecretario del Consejo

En Madrid, a 28 de abril de 2016

Visto el expediente relativo a la solicitud de autorización de Telefónica de España S.A.U. en relación con la provisión de un servicio de línea alquilada terminal de 2 Mbit/s a BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.U., la **SALA DE SUPERVISIÓN REGULATORIA** acuerda lo siguiente:

## **I ANTECEDENTES**

### **Primero.-Escrito de Telefónica solicitando autorización**

Con fecha 16 de diciembre de 2015 tuvo entrada en el Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC) un escrito de Telefónica de España S.A.U. (en adelante, Telefónica) por el que solicitaba que se admitiera la no razonabilidad de la provisión, en precios y condiciones reguladas, de un circuito de 2 Mbit/s solicitado por BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.U. (en adelante, BT) en la provincia de Toledo y, en consecuencia, que se le autorizara a variar las condiciones generales de suministro, pudiendo trasladar a BT el coste de la provisión.

### **Segundo.- Inicio de procedimiento administrativo**

Con fecha 12 de enero de 2016, siguiendo las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), esta

Comisión procedió a la incoación e instrucción del correspondiente procedimiento administrativo, comunicando este hecho a BT y Telefónica.

#### **Tercero.-Requerimiento de información a Telefónica**

Con fecha 18 de enero de 2016, se efectuó un requerimiento de información a Telefónica con el objeto de disponer de datos adicionales sobre su red de acceso en el área en la que debía ser provisionado el servicio a BT, por ser necesarios para la resolución del expediente.

#### **Cuarto.- Alegaciones de BT**

Con fecha 24 de febrero de 2016 BT presentó su escrito de alegaciones sobre la solicitud inicial de Telefónica.

#### **Quinto.- Escrito de desistimiento de Telefónica y traslado a BT**

Mediante escrito de fecha de 3 de marzo de 2016, Telefónica comunicó a la CNMC que, al haber sido anulada por BT la solicitud de provisión del circuito sobre el que se pidió la autorización de repercusión de altos costes, ha desaparecido el objeto del procedimiento. Por todo ello, Telefónica solicita que se proceda a archivar el procedimiento administrativo de referencia.

Mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2016 se dio traslado a BT del escrito de desistimiento de Telefónica.

#### **Sexto.- Escrito de contestación de BT**

Con fecha 31 de marzo de 2016, BT presentó escrito dando contestación al traslado del desistimiento de Telefónica.

En dicho escrito BT solicita que se continúe con la tramitación del expediente por la pervivencia del motivo de conflicto y la existencia de intereses tanto propios como generales que deben ser dilucidados. En concreto, BT insta a la resolución de este expediente para que se definan las reglas sobre: (i) los casos en los que se puede repercutir alto coste, (ii) la información que ha de proveer Telefónica para justificar dichos costes, y (iii) el modo en que han de repercutirse estos costes.

## **II FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES**

### **ÚNICO.- Habilitación competencial**

Según lo dispuesto en el artículo 12.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), este organismo es competente para intervenir en las relaciones entre operadores o entre operadores y otras entidades que se beneficien de las obligaciones de acceso e interconexión, a petición de cualquiera de las partes implicadas o de oficio cuando esté justificado, con objeto de fomentar y, en su caso, garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, así como la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3 del mismo texto legal.

Asimismo, los artículos 6 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, LCNMC) y 70.2.a) de la LGTel disponen que esta Comisión ejercerá, entre otras, las funciones de definición y análisis de mercados de referencia, la identificación del operador u operadores que posean un poder significativo en el mercado cuando no exista competencia efectiva, y en su caso la imposición de obligaciones regulatorias a los mismos, todo ello de acuerdo con el procedimientos y efectos determinados en los artículos 13 y 14 de la citada LGTel y en su normativa de desarrollo.

Mediante Resolución de fecha 11 de abril de 2013 se aprobó la tercera revisión de la definición y análisis del mercado de segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor, la designación del operador con poder significativo de mercado así como la imposición de obligaciones específicas.

En dicha Resolución se prevé que, cuando Telefónica considere no razonable el suministro de una línea alquilada terminal con interfaces tradicionales de acuerdo con los precios y condiciones reguladas, deberá solicitar la autorización a la CNMC para variar las condiciones generales de suministro.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 del Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre<sup>1</sup>, el organismo regulador podrá “*introducir cambios en las ofertas de referencia para hacer efectivas las obligaciones a las que se refiere este capítulo y establecerá, para cada tipo de oferta de referencia, el procedimiento para su aplicación y, en su caso, los plazos para la negociación y formalización de los correspondientes acuerdos de acceso; [...]*”.

En ejercicio de dicha habilitación competencial, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la CNMC han aprobado, mediante las Resoluciones de 20 de diciembre de 2007, 7 de diciembre de 2010, 18 de julio de 2013 y 23 de julio de 2015, las sucesivas revisiones de la Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA) de Telefónica.

Por último, atendiendo a lo previsto en los artículos 20.1 y 21.2 de la LCNMC, y en el artículo 14.1.b del Estatuto Orgánico de la CNMC aprobado por Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, el órgano competente para resolver el presente procedimiento administrativo es la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC.

---

<sup>1</sup> Vigente en virtud de la Disposición Transitoria primera de la LGTel.

### III FUNDAMENTOS JURÍDICOS MATERIALES

#### ÚNICO.- Desistimiento del solicitante

La LRJPAC, en su artículo 87.1, contempla el desistimiento de su solicitud por parte del interesado como uno de los modos de terminación del procedimiento:

*«Artículo 87. Terminación. 1.- Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad. (...)».*

Los artículos 90 y 91 de la misma norma legal regulan el ejercicio, medios y efectos del derecho de desistimiento:

*«Artículo 90. Ejercicio. 1.- Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos. 2.- Si el escrito de iniciación se hubiese formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado».*

*«Artículo 91. Medios y efectos. 1.- Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia. 2.- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. 3.- Si la cuestión suscitada por la incoación del expediente entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento».*

Del contenido de los preceptos citados se desprende que todo interesado, en este caso Telefónica como entidad que realizó la solicitud, podrá desistir de ella (artículo 90.1 de la LRJPAC). Dicho desistimiento ha de realizarse por cualquier medio que permita su constancia (artículo 91.1 de la LRJPAC), requisito que cumple el escrito presentado por Telefónica el 3 de marzo de 2016.

Debe señalarse que la apertura del expediente viene motivada, tal como se señaló al establecer su objeto, en la facultad que asiste a Telefónica según las obligaciones del mercado impuestas, de pedir la autorización de esta Comisión para modificar, caso a caso, las condiciones de suministro reguladas para los circuitos de interfaz tradicional. No obstante, la anulación de la solicitud de provisión del servicio mayorista de 2 Mbit/s por parte de BT implica, como tal, la desaparición del propio objeto sobre el cual Telefónica solicitó la citada autorización, por lo que esta empresa dispone de la facultad para desistir de dicha solicitud.

Por otro lado, sobre la cuestión planteada por BT en relación con la posible definición de unas condiciones generales bajo las cuales pueda decidirse, a priori, si los costes de provisión de un determinado circuito mayorista con interfaces tradicionales pueden ser trasladados al operador solicitante (situación de alto coste), esta Comisión considera que ésta no debería ser analizada y resuelta en el marco del presente expediente de autorización, que afecta a la solicitud de un circuito de un operador concreto.

Dichas cuestiones deberían tratarse en un procedimiento general que permita la intervención de todos los posibles interesados en la regulación general de esta materia, para garantizar la oportuna defensa de sus posibles derechos e intereses que pueden verse también afectados. En este sentido, un posible marco que cumpliría dichas condiciones sería un futuro procedimiento de revisión de los precios y condiciones económicas de la ORLA.

En cualquier caso, se comparte la idea de BT sobre que la posible decisión que hubiera podido tomarse en el actual expediente de referencia, o en cualquier otro futuro que pueda abrirse previa petición de Telefónica, en cierta manera, podría permitir conocer a priori, aunque fuera para un caso concreto, algunos condicionantes que, a juicio de esta Comisión, permitirían decidir sobre la autorización, o no, del traslado de los costes de provisión al operador solicitante del circuito.

A este respecto, actualmente se encuentra abierto un nuevo procedimiento similar al presente expediente relativo a otra solicitud de autorización de Telefónica de repercusión de altos costes para la provisión de un circuito de 2 Mbit/s solicitado por BT<sup>2</sup>, por lo que el archivo del presente expediente no le privará de conocer las posibles circunstancias que puedan afectar a este tipo de circuitos, respondiendo así a su interés sobre la fijación de ciertos criterios aplicables a los altos costes en los circuitos terminales de la ORLA con interfaces tradicionales.

Por todo lo expuesto, no cabe admitir las alegaciones realizadas por BT para continuar con la tramitación del presente expediente. En consecuencia, tras dar por ejercido el derecho de desistimiento al que se refieren los artículos 90.1 y 91.2 de la citada LRJPAC, y considerando que, a tenor de lo deducido del concreto expediente tramitado al efecto, no se da un interés general para su continuación ni se estima conveniente ni necesario sustanciar la determinada cuestión objeto de aquél para su definición y esclarecimiento, se ha de aceptar el desistimiento presentado por Telefónica motivado por la desaparición del objeto de su solicitud de autorización, debiendo declarar concluso el presente procedimiento (artículos 87.1 y 91.2 de la LRJPAC).

---

<sup>2</sup> Expediente IRM/DTSA/003/16.

Vistos los citados antecedentes y fundamentos jurídicos, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en uso de las competencias que tiene atribuidas,

### **RESUELVE**

**ÚNICO.-** Aceptar el desistimiento presentado por Telefónica España, S.A.U., en el procedimiento de referencia y, en consecuencia, declarar concluso el mismo por no existir motivo alguno que justifique su continuación.

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual y notifíquese a los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que pueden interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.